



Asamblea General

Distr. general
23 de marzo de 2015
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

28º período de sesiones

Tema 4 de la agenda

**Situaciones de derechos humanos que
requieren la atención del Consejo**

Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee*

Resumen

Desde 2011, Myanmar ha experimentado una profunda transformación que ha incidido en muchos aspectos de la vida en el país. Sin embargo, sigue habiendo indicios de que el Gobierno está dando marcha atrás y la discriminación y los conflictos étnicos suscitan cada vez más preocupación. En el presente informe se exponen los principales ámbitos de atención de la Relatora Especial y se formulan recomendaciones destinadas a contribuir a los esfuerzos de Myanmar por respetar, proteger y promover los derechos humanos y lograr la democratización, la reconciliación nacional y el desarrollo.

* Documento presentado con retraso.

GE.15-04576 (S) 180316 220316



* 1 5 0 4 5 7 6 *

Se ruega reciclar



Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–3	3
II. Situación de los derechos humanos	4–59	3
A. Espacio democrático	4–20	3
B. Participación en la vida política y proceso electoral	21–26	8
C. Discriminación contra minorías y por motivos de género	27–30	9
D. Cuestiones de derechos humanos en el marco de conflictos	31–48	11
E. Cuestiones relativas al desarrollo, las tierras y el medio ambiente	49–56	16
F. Estado de derecho y rendición de cuentas	57–59	18
III. Conclusiones	60–62	19
IV. Recomendaciones	63–72	19

I. Introducción

1. Este informe, presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 25/26 del Consejo de Derechos Humanos y la resolución 69/248 de la Asamblea General, se refiere a la evolución de los derechos humanos en Myanmar desde que el anterior Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar presentara su informe al Consejo en marzo de 2014 (A/HRC/25/64) y la actual Relatora Especial presentara el suyo a la Asamblea General en octubre de 2014 (A/69/398). En su resolución 25/26, el Consejo de Derechos Humanos invitó a la Relatora Especial a incluir en el presente informe nuevas recomendaciones sobre las necesidades de Myanmar, en particular en lo que se refiere a la asistencia técnica y la creación de capacidad, e información sobre los avances en el proceso y la reforma electorales en el período previo a las elecciones de 2015.

2. La Relatora Especial llevó a cabo su segunda misión a Myanmar del 7 al 16 de enero de 2015. Expresa su agradecimiento al Gobierno por la colaboración brindada durante su visita¹, durante la cual celebró reuniones con representantes del Gobierno y otras partes interesadas en Yangon y Nay Pyi Taw y visitó el estado de Rakhine y el norte del estado de Shan. También visitó la prisión de Insein, donde se reunió con presos políticos, y celebró reuniones en Bangkok, entre otros con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia.

3. La Relatora Especial también se mantuvo en contacto con las Misiones Permanentes de Myanmar en Ginebra y Nueva York. Envío siete comunicaciones conjuntas entre el 12 de marzo de 2014 y el 15 de febrero de 2015 y, antes de esta última fecha, el Gobierno ya había respondido a tres de ellas.

II. Situación de los derechos humanos

A. Espacio democrático

4. Al inicio de su mandato, el Presidente Thein Sein se comprometió a trabajar en pro de la democracia y las reformas democráticas y, en particular, por un gobierno abierto y que rindiera más cuenta de sus actos. Desde marzo de 2011 se han registrado importantes avances en cuanto a la libertad de reunión y de expresión: los medios de comunicación gozan de mayor libertad y se pueden expresar cada vez más opiniones en la esfera pública. Sin embargo, la Relatora Especial observa que sigue habiendo grandes restricciones en muchos elementos del espacio democrático, que incluso pueden haberse ampliado desde su visita anterior en julio de 2014. Una democracia auténtica y efectiva requiere un marco jurídico y político que fomente los derechos de conformidad con las normas internacionales. La posibilidad de reunirse y expresar agravios es un requisito fundamental de la reforma y la rendición de cuentas. La Relatora Especial cree que se necesita una reforma significativa para alcanzar ese objetivo.

5. La existencia de medios de comunicación libres e independientes también es un componente importante de una sociedad democrática. Se señaló a la Relatora Especial en el curso de su visita que el Gobierno estaba reformando la gestión de los medios de comunicación y había trabajado con periodistas con tal fin. La Relatora considera que se trata de una medida positiva y toma nota de la entrada en vigor de numerosas leyes nuevas. Alienta un proceso de consulta amplio y transparente en que participen, entre otros, expertos en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Se comentó a la

¹ Para obtener más información sobre la misión, véase: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15523&LangID=E.

Relatora Especial que no se habían celebrado suficientes consultas durante la elaboración de la Ley de Televisión y Radiodifusión, que se debate actualmente en el Parlamento. La Relatora exhorta al Gobierno a hacer uso de esta Ley para que haya pluralidad en los medios de comunicación y se asignen equitativamente licencias a emisoras públicas, comerciales y comunitarias. También se expresó inquietud por el proyecto de ley de los medios de comunicación públicos. La Relatora Especial destaca la importancia de crear un organismo público de radiodifusión que funcione de manera independiente y con libertad editorial e incluya un sistema de financiación que no socave su independencia.

6. En 2014, la Ley de Impresores y Editores sustituyó a la Ley de Prensa (Facultades Excepcionales) y a la Ley de Inscripción de Impresores y Editores. Según la nueva Ley, todas las publicaciones deben registrarse en el Ministerio de Información, tras lo cual se conceden licencias válidas durante cinco años. La nueva Ley, si bien supone una mejora respecto de las licencias de un año que se concedían antiguamente, carece de salvaguardias para que la decisión de conceder una licencia no dependa de factores políticos.

7. La Ley de Medios de Comunicación, aprobada en 2014, mejoraba los proyectos de ley anteriores en algunos aspectos, como la eliminación de las penas de prisión en caso de infracción. Sin embargo, la Ley impone restricciones confusas a la libertad de expresión, por ejemplo, al autorizar al personal de los medios de comunicación a investigar, publicar y difundir información de conformidad con “normas y reglamentos” no definidos que pueden dar lugar a restricciones imprevistas y con otros “derechos” con referencia a la Constitución o a otras leyes indeterminadas. Asimismo, enuncia la obligación, expresada en términos excesivamente amplios, de no publicar noticias que dañen deliberadamente la reputación de una persona u organización. En la Ley se establece un Consejo de Medios de Comunicación, que debe actuar como intermediario en el caso de controversias y supervisar el código de conducta definido en ella. La Relatora Especial recomienda revisar esta Ley con miras a retirar el código de conducta, que debería ser voluntario, y reforzar el Consejo de Medios de Comunicación, entre otras cosas, dotándolo de una mayor independencia mediante salvaguardias frente a la influencia política. Un órgano de este tipo podrá entonces formar una mentalidad de autorregulación en los medios de comunicación.

8. Se informó a la Relatora Especial de que periodistas, defensores de los derechos humanos y quienes expresan opiniones críticas continuaban sometidos a situaciones de intimidación, acoso y privación de libertad, en virtud de leyes de difamación, violación de domicilio y seguridad nacional que contravienen las normas internacionales de derechos humanos. En diciembre de 2014, el Comité para la Protección de los Periodistas publicó su lista anual de profesionales de los medios de comunicación encarcelados en todo el mundo². Ese año, Myanmar figuró en la lista, por primera vez desde 2011, en el octavo lugar entre los países con mayor número de periodistas encarcelados. En la actualidad, hay diez periodistas encarcelados en Myanmar que fueron condenados en 2014. Entre ellos se encuentran el redactor jefe del semanario *Unity* y cuatro empleados, a quienes se condenó a diez años de prisión en julio de 2014 en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1923. El 2 de octubre, el tribunal regional redujo la condena a siete años tras una apelación. Los cinco fueron declarados culpables de revelar secretos de Estado después de que un informe publicado en el semanario *Unity* en enero de 2014 denunciara la existencia de una fábrica secreta de armas químicas en la región de Magway, en la zona central del país.

9. Defensores de los derechos humanos informaron a la Relatora Especial de que estaban siendo sometidos a vigilancia periódica mediante llamadas telefónicas y de que sus movimientos y actividades eran investigados y controlados. La Relatora pone de relieve la obligación del Gobierno de demostrar la necesidad y proporcionalidad de tales medidas, en particular en relación con el derecho a la vida privada, y de establecer un mecanismo de

² Puede consultarse en: www.cpj.org/imprisoned/2014.php.

supervisión jurídica y parlamentaria de las facultades de vigilancia de que goza el poder ejecutivo.

10. Un importante problema que observó la Relatora Especial durante su visita se refería a la necesidad de que el Gobierno abordara las cuestiones relativas a la incitación al odio y a la violencia como parte de su obligación de ofrecer un entorno seguro para todos, incluidas las minorías étnicas, las minorías religiosas y las mujeres. La promoción de la tolerancia, la comprensión entre las culturas y el diálogo entre las religiones, la eliminación de estereotipos raciales, religiosos y de género y el libre intercambio de ideas y puntos de vista alternativos son elementos cruciales en la lucha contra el discurso de odio, la incitación al odio y la intolerancia en todas sus manifestaciones³. Es fundamental que los altos cargos de gobierno rechacen formalmente el discurso de odio y condenen la expresión de ideas de odio. Sin embargo, tales medidas no deben utilizarse para limitar aún más la libertad de expresión, porque un entorno propicio a la libertad de expresión y la eliminación del discurso de odio se refuerzan uno al otro⁴. Durante su visita, la Relatora Especial fue objeto de ataques personales por miembros de la comunidad budista nacionalista, que utilizaron un lenguaje vulgar, sexista e insultante al denunciar las observaciones que había hecho sobre los posibles efectos discriminatorios de los proyectos de ley de control demográfico, monogamia, conversión religiosa y matrimonio de mujeres budistas.

11. A pesar de que la Constitución prohíbe el uso de la religión con fines políticos, quienes critican el uso del budismo con fines nacionalistas o extremistas siguen expuestos a infracciones de los derechos humanos⁵. U Htin Lin Oo se encuentra actualmente detenido sin fianza en la prisión de Monywa, en la región de Sagaing, después de que en octubre de 2014 pronunciara un discurso en que denunciaba la utilización del budismo como herramienta del extremismo y el nacionalismo. En diciembre de 2014, U Htin Lin Oo fue acusado con arreglo al artículo 295 a) del Código Penal, que prohíbe “los actos deliberados y malintencionados cuyo objeto sea ultrajar los sentimientos religiosos”, y al artículo 298, por el cual se prohíbe la utilización deliberada de palabras que hieran los sentimientos religiosos.

12. La libertad de reunión pacífica también constituye un pilar fundamental de una democracia pujante. En el contexto de las próximas elecciones, la Relatora Especial desea destacar el siguiente pasaje de la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones: “No es posible lograr elecciones democráticas auténticas si no se puede ejercer cotidianamente una amplia gama de otros tipos de derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación”⁶. Se han realizado notables progresos desde 2011 en lo que hace a abrir espacios de opinión en que se puedan expresar ideas de manera pacífica a través de manifestaciones públicas, mítines políticos y marchas. Sin embargo, durante su última visita, se informó a la Relatora Especial de que se sigue privando de

³ Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, párr. 37.

⁴ Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, recomendación general núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el discurso de odio racista.

⁵ El artículo 364 de la Constitución de 2008 establece que “el uso indebido de la religión con fines políticos está prohibido. Además, toda ley que promueva o pueda promover sentimientos de odio, enemistad o enfrentamiento entre comunidades o grupos religiosos o raciales es contraria a la presente Constitución”.

⁶ Myanmar es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también está obligado a respetar el derecho internacional consuetudinario, que incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

libertad y enjuiciando a personas que ejercen su derecho de reunión pacífica y de asociación, en aspectos tales como la confiscación de tierras, los proyectos de desarrollo a gran escala, la degradación ambiental y la reforma constitucional. Se han imputado cargos a muchos manifestantes sobre la base de la Ley del Derecho de Manifestación y Reunión Pacíficas y los artículos 188, 295 a), 333 y 505 b) del Código Penal.

13. La Ley del Derecho de Manifestación y Reunión Pacíficas, modificada en junio de 2014, requiere que las autoridades autoricen la celebración de una reunión o manifestación con al menos cinco días de antelación⁷. La Ley permite que se establezcan restricciones a tales actos, pese a que en ella no se definen normas específicas relativas a la concesión de una autorización o la imposición de restricciones. Los artículos 10 a 12 imponen restricciones específicas sobre el desarrollo del acto, incluido lo que se puede decir, corear o portar durante él, y sobre el comportamiento de los participantes. El incumplimiento de alguna de estas normas supone la revocación de la autorización para el acto. Se informó a la Relatora Especial de varios casos en que se había autorizado la protesta, pero no el lugar propuesto para su celebración. En cambio, se había ordenado que la protesta tuviera lugar en un sitio alejado y cerrado. Cuando los manifestantes procedieron a expresar sus agravios en lugares más públicos, fueron detenidos. La Relatora Especial observa con preocupación los numerosos casos en que la ley se aplica con severidad para sancionar a quienes se manifiestan en contra del Gobierno, mientras que los que se manifiestan a favor no son sometidos a las mismas restricciones o sanciones.

14. Para que la Ley del Derecho de Manifestación y Reunión Pacíficas sea compatible con las normas internacionales, la Relatora Especial recomienda que se sustituya el antiguo sistema de autorización de reuniones pacíficas por un sistema de notificación voluntaria. Debe eliminarse la gran variedad de restricciones impuestas a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión que vayan más allá de las admisibles según el derecho internacional. Además, la decisión de las autoridades de denegar la autorización para celebrar una reunión pacífica debe ser apelable ante un órgano independiente e imparcial. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Manifestación y Reunión Pacíficas, quien sea declarado culpable de celebrar una reunión o manifestación pacífica sin la debida autorización puede ser sancionado con una pena máxima de seis meses de prisión, una multa de 10.000 kyats, o ambas cosas. Además, en los artículos 17 y 19 se imponen penas de prisión; las sanciones penales contra quienes ejercen su derecho de reunión pacífica y libertad de expresión, incluidas las penas de prisión, son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos.

15. A finales de 2014, los datos oficiales indicaban que 27 presos políticos seguían encarcelados. Sin embargo, se ha informado a la Relatora Especial de que la cifra real podría ser mucho más elevada. Además, durante su visita se le comunicó que más de 78 agricultores cumplían penas de prisión a las que habían sido condenados por violación de la propiedad tras la confiscación de sus tierras y más de 200 activistas se encontraban en espera de juicio fuera de prisión. Las cifras siguen siendo alarmantemente elevadas y preocupa a la Relatora Especial que no se haya cumplido el compromiso contraído anteriormente de que no habría más presos políticos en Myanmar.

16. A finales de 2014, el comité encargado de revisar la situación de los presos fue disuelto y sustituido por el Comité para Asuntos de los Presos de Conciencia, formado por 28 miembros y presidido por el Ministro Adjunto del Interior, General de Brigada Kyaw Kyaw Tun. El comité anterior se había reunido únicamente en tres ocasiones durante 2014 sin emitir ningún informe público. La Relatora Especial observa con preocupación que

⁷ El artículo 4 de la Ley del Derecho de Manifestación y Reunión Pacíficas establece que “los ciudadanos o las organizaciones que quieran ejercer el derecho de reunión y manifestación pacíficas y expresar sus opiniones deben solicitar una autorización con al menos cinco días de antelación”.

algunos representantes de la sociedad civil han quedado al margen del nuevo Comité e insta al Gobierno a que vele por que este sea efectivo y esté debidamente facultado para poner fin a la privación de libertad y al encarcelamiento de quienes ejercen sus derechos humanos, en particular los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica. A este respecto, la Relatora Especial recomienda que el Comité tenga un mandato claro, programe reuniones con carácter periódico y pueda visitar sin restricciones todos los lugares de detención con plena autoridad para interrogar a funcionarios del Estado. Asimismo, la labor del Comité debe ser transparente e incluir la publicación periódica de informes públicos.

17. Durante su visita, la Relatora Especial se reunió con reclusos que cumplían condenas en virtud del artículo 18 de la Ley del Derecho de Reunión y Manifestación Pacíficas, entre ellos U Sein Than, que había sido detenido inmediatamente después de la anterior visita de la Relatora Especial cuando se dirigía a la Oficina de las Naciones Unidas para entregarle nuevos documentos relacionados con la denuncia de confiscación de tierras de la comunidad michaungkan⁸. En virtud del artículo 18 de la mencionada Ley, cinco tribunales locales de Yangon condenaron a U Sein Than a cumplir un total de dos años de prisión por manifestarse sin permiso. También fue condenado en virtud de la Ley Municipal de Yangon, aparentemente por obstruir la acera. Se imputaron cargos contra su hija, Nae Nwe Than, y otras cuatro personas en virtud del artículo 18 por manifestarse sin permiso en el exterior de uno de los tribunales en que se sustanciaba la causa contra U Sein Than.

18. La Relatora Especial también destaca el caso de Ko Wai Lu, quien permanece en prisión preventiva desde el 18 de diciembre de 2014 en la cárcel de Insein imputado con arreglo al artículo 505 b) del Código Penal por prestar apoyo a manifestantes de la comunidad michaungkan. Además, el 18 de febrero de 2015, 14 miembros de esa comunidad fueron condenados a seis meses de prisión en virtud del artículo 18 de la Ley del Derecho de Manifestación y Reunión Pacíficas y los artículos 142 (asociación ilícita) y 341 (retención ilícita) del Código Penal. Los 14 miembros permanecen recluidos en la prisión de Insein y se proponen apelar sus condenas.

19. La Relatora Especial encomia que el Cuerpo de Policía de Myanmar esté dispuesto a ponerse en condiciones de proteger mejor los derechos de reunión, asociación y expresión mediante un control más adecuado de las reuniones públicas de conformidad con las normas internacionales y colaborando, entre otros, con la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, le sigue preocupando el uso excesivo de la fuerza a que, según los informes, recurre la policía de Myanmar cuando hay protestas. En relación con el caso más reciente que se ha señalado a la atención de la Relatora, el 22 de diciembre de 2014 la policía habría abierto fuego contra los manifestantes en la mina de cobre de Letpadaung utilizando munición real; como resultado, Daw Khin Win perdió la vida y varias personas resultaron heridas. La Relatora Especial insiste en que las normas internacionales exigen que la fuerza empleada para controlar multitudes sea proporcionada y se limite al mínimo necesario para alcanzar el objetivo policial legítimo que se persiga⁹. Solo se permite el uso deliberado de la fuerza letal cuando es estrictamente inevitable para proteger una vida. Es preciso prestar especial

⁸ La comunidad michaungkan había estado organizando sentadas pacíficas cerca del ayuntamiento de Yangon desde marzo de 2014 para denunciar la confiscación de sus tierras por parte del ejército a principios de los años noventa.

⁹ Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; el artículo 3 del Código de Conducta y el principio 9 de los Principios Básicos recogen las disposiciones del derecho internacional vinculante. Véase el informe provisional que el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentó a la Asamblea General (A/61/311), párr. 35.

atención a la responsabilidad y la rendición de cuentas de los altos mandos cuando hay reuniones públicas. Se informó a la Relatora Especial de las numerosas dificultades a que se enfrentaba la policía para controlar las manifestaciones, en particular cuando cobraban un cariz violento. La Relatora reitera la necesidad de revisar la legislación nacional, las políticas y las estrategias e impartir cursos de formación integral y permanente a las fuerzas del orden para que respeten las normas internacionales de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas.

20. Constituyó motivo de aliento para Relatora Especial recibir la noticia de la puesta en libertad del Dr. Tun Aung de la prisión de Insein tras haber sido condenado a una pena de 17 años de reclusión por su presunta participación en los actos de violencia entre budistas y musulmanes que tuvieron lugar en el estado de Rakhine en junio de 2012. También acogió con gran agrado la liberación de Kyaw Hla Aung el 17 de octubre de 2014 tras recibir un indulto presidencial. Sin embargo, la Relatora Especial entiende que, en ambos casos, la puesta en libertad es condicional y exhorta al Gobierno a que levante todas las restricciones a que siguen estando sometidas estas dos personas.

B. Participación en la vida política y proceso electoral

21. La Relatora Especial observó en el curso de su visita que los preparativos para las próximas elecciones nacionales estaban muy avanzados y que había una colaboración adecuada entre los organismos electorales nacionales y los asesores electorales internacionales de diversas organizaciones. Desde la perspectiva de los derechos humanos, hay varias cuestiones que deben abordarse para que las elecciones cumplan las normas internacionales de transparencia, inclusividad, participación, libertad e imparcialidad. Como se señaló anteriormente, es necesario armonizar el marco jurídico que regula los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica con las normas internacionales. En la fase previa a las elecciones, hay que tratar en particular de fomentar un espacio de debate público, libre y abierto en que participen todos los sectores de la población. Habría que alentar especialmente a los miembros de los grupos tradicionalmente marginados, como las minorías étnicas y religiosas, y a las mujeres a presentarse como candidatos a las elecciones y participar en los debates públicos sobre cuestiones electorales. Es fundamental en una nueva y ambiciosa democracia que toda la población pueda formarse una opinión con conocimiento de causa, de manera independiente y sin coerción, manipulación o represalias¹⁰.

22. El 30 de septiembre de 2014 entraron en vigor las modificaciones introducidas en la Ley de Registro de Partidos Políticos, y la Comisión Electoral de la Unión comunicó a los partidos políticos que tenían aproximadamente dos meses para ajustarse a ellas. Las nuevas disposiciones establecen que únicamente los ciudadanos de pleno derecho pueden formar partidos políticos y que solo pueden afiliarse a ellos los ciudadanos de pleno derecho y los ciudadanos naturalizados. Antes de que se introdujeran las modificaciones, todas las categorías de ciudadanos, incluidos los ciudadanos asociados, así como los titulares de certificados temporales, podían formar partidos políticos y afiliarse a ellos. Es probable que las modificaciones, propuestas por el Partido Nacional de Rakhine, afecten en mayor medida a los partidos formados por políticos que se identifican como rohinyás. Se indicó a la Relatora Especial que, a la fecha de su visita, no todos los partidos políticos habían presentado la información requerida para dar cumplimiento a las modificaciones.

23. El Parlamento aprobó el 2 de febrero de 2015 un proyecto de ley por el cual se autorizaba a todas las categorías de ciudadanos, así como a los titulares de tarjetas de

¹⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996) sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párrs. 12 y 19.

registro temporal, a votar en el referendo constitucional que estaba previsto para una fecha posterior en el curso del año. Sin embargo, el 17 de febrero de 2015 el Tribunal Constitucional dictaminó que la Ley del Referendo era inconstitucional. Además, el 11 de febrero de 2015 el Presidente anunció que todas las tarjetas de registro temporal expirarían el 31 de marzo de 2015¹¹, y que los documentos caducados debían entregarse antes del 31 de mayo de ese mismo año¹². Es muy probable que ello restrinja gravemente los derechos políticos de los titulares de tarjetas de registro temporal y represente un retroceso en el proceso de reforma.

24. Según se indicó a la Relatora Especial en reuniones con funcionarios y parlamentarios del Gobierno, el *referendum* constitucional tendrá lugar en mayo de 2015. Sin embargo, aún no había acuerdo sobre las nuevas disposiciones que se someterían a votación. En cualquier caso, si bien se ha propuesto un referendo antes de las elecciones nacionales, se ha dicho que si sus resultados hacen necesario reformar la Constitución, ello no se hará antes de las elecciones.

25. La Relatora Especial alienta a que se siga avanzando en el ámbito de la reforma constitucional, pues constituye una parte integral del proceso de transición democrática y reconciliación nacional de Myanmar. Los militares siguen teniendo garantizado el 25% de los escaños en cada una de las cámaras legislativas (arts. 74, 109 b) y 141 b) de la Constitución de 2008) y cargos clave del poder ejecutivo en los Ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos (art. 232 b)) y hay quienes no pueden presentar su candidatura a la Presidencia por motivos arbitrarios y discriminatorios (arts. 59 b), e) y f)). Será necesario reformar nuevamente el artículo 40 c), por el que se autoriza al Comandante en Jefe a asumir el poder soberano del Estado en virtud de un conjunto amplio de condiciones imprecisas relacionadas con el estado de emergencia. Los militares también están por encima del marco jurídico y judicial del país y fuera del control y la supervisión civiles. Estas deficiencias también deberán subsanarse para lograr la reconciliación nacional con los grupos étnicos armados del país, además de reforzar la descentralización que ya se había previsto en la Constitución de 2008.

26. La Relatora Especial reitera las declaraciones contenidas en su informe anterior en el sentido de que, de acuerdo con las normas internacionales, el derecho a presentarse como candidato en unas elecciones puede limitarse únicamente conforme a criterios objetivos y razonables, como la exigencia de una edad mínima y la incapacidad mental. La inhabilitación no debería basarse en requisitos irrazonables o discriminatorios, como el nivel educativo, la residencia, la descendencia o ascendencia, o la afiliación política¹³.

C. Discriminación contra minorías y por motivos de género

27. Sigue preocupando a la Relatora Especial la falta de una política integral y de liderazgo para hacer frente a la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas. Habida cuenta del actual contexto de reformas, la Relatora exhorta al Gobierno a crear un marco jurídico y normativo basado en los principios internacionales de derechos humanos de igualdad y no discriminación para hacer frente a la tensión y la violencia intracomunitarias. En este contexto, la Relatora Especial expresó su inquietud al conocer el avance de cuatro proyectos de ley relacionados con la conversión religiosa, los matrimonios interconfesionales, la monogamia y el control demográfico. Estos proyectos de ley no solo

¹¹ Comunicación Presidencial núm. 19/2015, párr. 2, con arreglo al artículo 13 3) del Reglamento para la Inscripción de Residentes en Birmania de 1951.

¹² *Ibid.*, párr. 3, con arreglo al artículo 13 4) del Reglamento para la Inscripción de Residentes en Birmania de 1951.

¹³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25, párrs. 4, 15 y 17.

son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que podrían agravar las tensiones existentes entre las minorías étnicas y religiosas en el país.

28. El proyecto de ley de conversión religiosa establece un sistema de conversión regulado por el Estado, entre otras cosas, mediante una entrevista con una junta municipal de inscripción compuesta por 11 miembros. La Relatora Especial considera que este procedimiento es incompatible con el derecho a la libertad de religión. Le preocupa además que los delitos y las sanciones por “insultar a la religión” que se contemplan en el proyecto de ley se definan en términos vagos y puedan utilizarse para discriminar contra las religiones minoritarias. En una región conocida por su alta tasa de natalidad, las disposiciones del proyecto de ley de salud para el control demográfico activarían medidas en materia de salud y control de la natalidad, incluida la posibilidad de exigir un espaciamiento de 36 meses entre dos embarazos. La Relatora Especial considera que establecer un requisito legal para el espaciamiento de los nacimientos es una injerencia ilegítima del Estado en el derecho de la mujer a decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento de los nacimientos que desea, como se estipula en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la que Myanmar es parte. Las mejores estrategias para hacer frente a la pobreza, la mortalidad materna e infantil y el control del espaciamiento de los nacimientos son la educación, la atención de salud y otras estrategias de empoderamiento de la mujer. El 19 de febrero de 2015, la cámara alta del Parlamento aprobó el proyecto de ley de salud para el control demográfico con 154 votos a favor y 12 en contra.

29. El proyecto de ley sobre el matrimonio especial de las mujeres budistas de Myanmar impondría requisitos adicionales y sanciones a los hombres que no sean budistas y hayan contraído matrimonio con mujeres budistas o tengan intención de hacerlo. Por lo tanto, este proyecto discrimina específicamente a los hombres que no son budistas. Las cuestiones sustantivas que el proyecto de ley pretende abordar, como los derechos de sucesión de las mujeres budistas y la custodia de los hijos después del divorcio, deben resolverse en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, que se aplican por igual a toda la población. No se debe discriminar a determinados grupos religiosos. Se señaló a la Relatora Especial que el Código Penal ya prohíbe la poligamia y, por lo tanto, no parece necesario aprobar el proyecto de ley de monogamia. Preocupa a la Relatora el lenguaje que se emplea en este proyecto de ley, que está dirigido contra las confesiones minoritarias y tiene una finalidad discriminatoria. La Relatora Especial se remite a las obligaciones internacionales que Myanmar ha contraído como Estado Miembro de las Naciones Unidas, en particular en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración Universal de Derechos Humanos. La aprobación de los proyectos de ley mencionados constituiría un retroceso en el proceso de reforma política y en los esfuerzos por construir una comunidad más tolerante e inclusiva.

30. En Myanmar, las tensiones y la violencia entre las comunidades religiosas siguen constituyendo un problema mayúsculo y se necesitan con urgencia políticas y programas del Estado para hacerles frente, así como un plan de educación y reconciliación intercomunitaria. En el curso de su misión, la Relatora Especial viajó a Lashio para evaluar qué había ocurrido tras los actos de violencia entre comunidades de la zona que habían tenido lugar en mayo de 2013. A causa de ellos, una mujer budista había sufrido quemaduras graves, una persona había muerto y varios edificios habían sido incendiados, entre ellos, dos mezquitas, un orfanato musulmán, establecimientos hindúes y comercios locales. La violencia solía manifestarse en la forma de ataques organizados de turbas a las comunidades musulmanas locales. La Relatora Especial quedó impresionada por la cooperación entre las autoridades locales y por el compromiso de los dirigentes religiosos de las comunidades budista, musulmana, hindú y cristiana de trabajar juntos en aras de una

convivencia pacífica. Tras su visita a la zona afectada en agosto de 2013, el anterior Relator Especial, Tomás Ojea Quintana, observó que los musulmanes residentes y los propietarios de empresas tenían dificultades para recuperar sus propiedades debido a la existencia de obstáculos administrativos relacionados con la propiedad de la tierra¹⁴. La Relatora Especial observó con decepción que esos obstáculos aún no se habían superado e instó a las autoridades a resolver este problema de manera que la experiencia en Lashio sirviera de modelo para otras regiones de Myanmar en que había sido más difícil fomentar una cooperación de ese tipo.

D. Cuestiones de derechos humanos en el marco de conflictos

31. El conflicto entre el ejército y grupos étnicos armados sigue causando sufrimientos generalizados y transgresiones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Se estimaba que, a enero de 2015, había 240.000 personas desplazadas en Myanmar¹⁵. La Relatora Especial viajó al norte del estado de Shan para visitar campamentos de desplazados internos y reunirse con personas desplazadas por el conflicto. Debido a las escaramuzas, ataques y contraataques que se produjeron en el momento de su visita, la Relatora no pudo visitar los campamentos. Sin embargo, se le dijo que algunos desplazados internos temían ser devueltos prematuramente a sus pueblos, antes de que se hubiesen restablecido la seguridad y el orden de manera adecuada. Se indicó a la Relatora Especial que, si bien se estaban haciendo gestiones para que hubiera acceso humanitario adecuado a las zonas afectadas, en algunos casos los organismos humanitarios internacionales seguían teniendo dificultades para llegar a esas zonas y, en general, a las que no están bajo control del gobierno. También se recibió información sobre ataques contra la población civil durante operaciones militares de ambos bandos y de la imposición de trabajos forzados, en particular por parte de grupos étnicos armados que obligaban a los aldeanos a trabajar como porteadores. La Relatora Especial insiste en que todas las partes en conflicto tienen la obligación de impedir que se vulneren el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y facilitar el acceso humanitario.

32. En el curso de su visita, la Relatora Especial fue informada de los avances realizados en el proceso de paz y de que el Gobierno confiaba en que se alcanzaría un acuerdo de alto el fuego en todo el país en febrero de 2015. Sin embargo, desde entonces, se han producido intensos enfrentamientos en la zona autónoma de Kokang, en el noreste del estado de Shan, entre el ejército de Myanmar, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar y otros grupos armados. Según informes, miles de personas se han visto obligadas a desplazarse debido a los enfrentamientos y a los ataques contra enviados humanitarios. El 18 de febrero, se declaró el estado de emergencia por 90 días en la zona autónoma de Kokang, lo que concedió amplios poderes al ejército. En vista de que en las zonas étnicas fronterizas en que existe una fuerte presencia militar se están denunciando graves infracciones de los derechos humanos, la Relatora Especial insta al Gobierno a que durante el estado de emergencia se respeten las obligaciones internacionales del país en la materia. Incluso durante los estados de emergencia, los Estados tienen la obligación de defender los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida, a la no discriminación y a no ser sometido a torturas.

33. La concertación de un acuerdo general de alto el fuego, basado en principios internacionales de derechos humanos, es un requisito indispensable para alcanzar una paz y

¹⁴ Véase el informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar (A/68/397).

¹⁵ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Plan de Respuesta Humanitaria para Myanmar de 2015. Puede consultarse en: www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/HRP%20Myanmar_FINAL.pdf.

una prosperidad duraderas en las zonas de conflicto. La Relatora Especial recibió informes de algunos interlocutores según los cuales la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y las cuestiones relativas a los derechos sobre la tierra no son temas prioritarios en las negociaciones de alto el fuego. Además, las conversaciones que mantuvo con miembros de minorías étnicas dejaron de manifiesto una profunda desconfianza y desilusión con el proceso de paz. Las desigualdades arraigadas por razones históricas, las cuestiones relativas a los derechos sobre la tierra y los recursos naturales, la discriminación contra las minorías y los abusos generalizados de los derechos humanos ocupan un lugar central en el conflicto. La Relatora Especial destaca la importancia de abordar las cuestiones relativas a los derechos humanos durante la fase de negociación, en particular los compromisos y los mecanismos de rendición de cuentas, igualdad y no discriminación tras el alto el fuego.

34. En sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad se ha reiterado la importancia de la participación plena e igualitaria de las mujeres como agentes activos en la prevención y solución de conflictos¹⁶. En esas resoluciones se pide a los Estados Miembros que velen no solo por la plena participación de las mujeres en las negociaciones de paz, sino también por la incorporación de una perspectiva de género en todos los ámbitos del proceso de consolidación de la paz. En Myanmar, las negociaciones sobre el alto el fuego han estado protagonizadas principalmente por líderes militares hombres, lo que ha eclipsado las experiencias, sufrimientos y necesidades de las mujeres y los hombres en las zonas de conflicto.

35. El Consejo de Seguridad también ha instado a las partes en los conflictos armados a proteger a la población civil de la violencia sexual, entre otras cosas, mediante la adopción de medidas disciplinarias y de creación de capacidad¹⁷. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también ha expresado su preocupación por la alta prevalencia de casos de violencia sexual perpetrados por miembros de las fuerzas armadas y ha instado a Myanmar a adoptar medidas inmediatas para poner fin a estas transgresiones y enjuiciar y castigar a los responsables¹⁸. Un número considerable de denuncias de transgresiones graves de los derechos humanos en las zonas de conflicto que recibió la Relatora Especial se refiere a actos de violencia sexual perpetrados por oficiales militares¹⁹. Se indicó que las víctimas solían ser reacias a denunciar sus casos por miedo a poner en peligro el proceso de paz o su propia seguridad. En los casos en que se interpone una denuncia, la policía es renuente a incoar causas contra los militares por temor a represalias. Además, las causas tardan años en pasar por el sistema de justicia.

36. La Relatora Especial observa complacida lo que se está haciendo para aplicar el plan de acción conjunto que suscribieron el Gobierno y las Naciones Unidas en junio de 2012 con vistas a poner fin al reclutamiento y la utilización de niños soldados. Encomia al Gobierno por las importantes medidas que se han adoptado hasta el momento para apoyar la aplicación del plan, como la identificación y liberación de 553 niños desde que se suscribiera el plan de acción; el mayor acceso que ofrece el ejército al equipo de tareas

¹⁶ Resoluciones 1325 (2000) y 1889 (2009) del Consejo de Seguridad.

¹⁷ Resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2122 (2013) del Consejo de Seguridad.

¹⁸ Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Myanmar (CEDAW/C/MMR/CO/3), párrs. 24 y 25.

¹⁹ Véase, por ejemplo, el informe de noviembre de 2014 de la Liga de Mujeres de Birmania: "If they had hope, they would speak: The ongoing use of State-sponsored sexual violence in Burma's ethnic communities". El informe destaca 118 incidentes de violación colectiva, violación y tentativa de agresión sexual, documentados en Myanmar desde 2010, que habrían cometido las fuerzas del Estado en las zonas de alto el fuego y en las zonas aún en conflicto. El informe puede consultarse en: <http://womenofburma.org/if-they-had-hope-they-would-speak/>.

sobre vigilancia y presentación de informes en el país de las Naciones Unidas; la organización de una campaña nacional de toma de conciencia sobre el reclutamiento de niños y la aprobación de una serie de directrices para esclarecer las normas y prácticas de reclutamiento militar. Sin embargo, se informó a la Relatora Especial de que se seguía reclutando niños en las fuerzas de seguridad debido a que, al parecer, en el ejército seguía existiendo un sistema de reclutamiento basado en cuotas. La Relatora insta al Gobierno a resolver esta cuestión de inmediato y a acelerar la identificación, liberación y reintegración de todos los niños que actualmente prestan servicio en las fuerzas armadas nacionales y en la guardia fronteriza.

37. La Relatora Especial alienta al Gobierno a seguir solicitando asistencia técnica para poner en marcha mejores procesos de reclutamiento, mecanismos de verificación de la edad y medios independientes de vigilancia y supervisión de todas las fuerzas armadas (incluidas las fuerzas de la guardia fronteriza y otras fuerzas de seguridad) para prevenir el reclutamiento ilícito de niños. La Relatora destaca la importancia de llevar ante la justicia a los responsables del reclutamiento y la utilización de niños, incluso a quienes ejercen funciones de mando y a los intermediarios civiles que colaboran con el reclutamiento ilícito de niños. Asimismo, insta al Gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados a fin de consolidar los progresos realizados. La Relatora recomienda que los mecanismos de protección infantil se incorporen plenamente en los acuerdos de alto el fuego y de paz y en los mecanismos utilizados para vigilar su aplicación.

El estado de Rakhine

38. En el estado de Rakhine, la Relatora Especial se reunió con autoridades locales y dirigentes de la comunidad y visitó los campamentos de Myebon y Sittwe en que viven quienes tuvieron que desplazarse tras la ola de violencia de junio de 2012. Es sabido que existen campamentos exclusivamente para musulmanes rohinyá y no musulmanes que han contraído matrimonio con musulmanes y campamentos para budistas. En varias discusiones francas con representantes de ambas comunidades, la Relatora Especial pudo comprender mejor las causas profundas del conflicto, la historia del estado de Rakhine y los temores y sufrimientos de su pueblo. La Relatora Especial cree firmemente que deben abordarse con urgencia el subdesarrollo crónico del estado de Rakhine y las condiciones de pobreza en que viven algunos. Si bien reconoce que las autoridades del estado de Rakhine han puesto en marcha planes para fomentar un mayor desarrollo, no observó mejora significativa alguna respecto de la situación de los derechos humanos desde su anterior visita en julio de 2014. En concreto, subsisten las restricciones discriminatorias a la libertad de circulación de los desplazados internos de la comunidad musulmana, lo que tiene graves repercusiones en cuanto a la atención de salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, así como a la educación y los medios de sustento. Tampoco se han efectuado investigaciones independientes y dignas de crédito sobre las denuncias de graves infracciones de los derechos humanos, incluidas las que tuvieron lugar durante la gran ola de violencia de junio y octubre de 2012 y de enero de 2014 y después de ella, entre las que se cuentan denuncias de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, violencia sexual, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos durante la detención, inobservancia de las debidas garantías procesales y denegación del derecho a un juicio imparcial.

39. En su reunión con el Ministro Principal del estado de Rakhine, la Relatora Especial discutió el Plan de Acción de Rakhine elaborado por el Gobierno de la Unión y le prometieron un ejemplar de la versión más reciente. Al momento de prepararse el presente informe, ese ejemplar aún no había llegado a sus manos, por lo que no puede hacer observaciones actualizadas sobre las consecuencias del plan en materia de derechos humanos. En todo caso, le sigue preocupando que contenga disposiciones que contravengan las normas internacionales de derechos humanos, como medidas que clasifiquen a los

rohinyá como “extranjeros ilegales” y los sometan a internamientos prolongados en campamentos provisionales o permitan su expulsión del territorio.

40. Un componente importante del Plan de Acción de Rakhine, descrito previamente a la Relatora Especial, es el proceso de verificación de la ciudadanía para la población rohinyá. En su reciente visita, la Relatora visitó el campamento municipal de Myebon para desplazados internos de la comunidad musulmana, donde se realizó un ejercicio piloto de verificación de la ciudadanía. Se examinaron las solicitudes y la documentación de los desplazados internos que participaron en el proceso a fin de determinar si reunían las condiciones para obtener la ciudadanía con arreglo a la Ley de Ciudadanía de 1982, siempre y cuando se identificaran como bengalíes. El Viceministerio de Inmigración comunicó a la Relatora Especial que, de los 2.960 desplazados internos del campamento de Myebon, 1.312 personas mayores de 18 años reunían las condiciones para la ciudadanía, 88 de ellas no habían postulado y 94 aún debían hacerlo. De las 1.280 personas que presentaron su solicitud, hasta la fecha 97 han recibido la ciudadanía plena y 360 han sido naturalizadas. El siguiente paso será examinar la situación de los niños menores de 18 años. En el campamento, los residentes comunicaron a la Relatora Especial que solo 40 personas habían recibido la ciudadanía plena y 169 habían sido naturalizadas. El resto está esperando los resultados del ejercicio piloto y aún no ha recibido sus tarjetas de ciudadanía.

41. En el campamento musulmán de Myebon, la Relatora Especial se entrevistó con musulmanes de la minoría kaman, un grupo indígena reconocido, y con budistas que habían contraído matrimonio con musulmanes, lo que demostraron presentando sus documentos de identidad. Sin embargo, no podían abandonar el campamento, ya fuera por temor a su seguridad, por no tener autorización para hacerlo o por creer que no la tenían. Esto demuestra que los problemas de derechos humanos van más allá de quienes se identifican como rohinyás o bengalíes y se extienden a todos los musulmanes de la zona y a las personas casadas con musulmanes.

42. La Relatora Especial observó con profunda preocupación las pésimas condiciones de vida en el campamento musulmán de Myebon. La vida no ha cambiado siquiera para quienes han recibido sus tarjetas de ciudadanía. Como no se avanza hacia el logro de soluciones duraderas, los mecanismos individuales y comunitarios de tolerancia están agotados y, ante la imposibilidad de canalizar el aburrimiento y la frustración, el nivel de estrés y trauma psicosocial continuará aumentando si la situación no se resuelve. Muchos dijeron a la Relatora Especial que tenían dos opciones: quedarse y morir o marcharse en lanchas.

43. El Ministro Principal del estado de Rakhine informó a la Relatora Especial que persistía en el municipio de Myebon un clima de hostilidad y los musulmanes permanecían en el campamento por su propia seguridad. El derecho internacional de los derechos humanos establece claros límites a la privación de libertad cuando no se ha cometido ningún delito. La severa restricción de los derechos de los desplazados internos de la comunidad musulmana en algunas zonas del estado de Rakhine, en condiciones de privación de libertad y con pocos servicios esenciales, es una infracción grave del derecho internacional de los derechos humanos a la que debe ponerse término de inmediato.

44. Tras los atentados contra las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias que tuvieron lugar en marzo de 2014, numerosas organizaciones internacionales consideraron necesario suspender sus operaciones o retirar a su personal del estado de Rakhine, lo que tuvo grandes efectos en el bienestar de las comunidades budista y musulmana. A pesar de que las autoridades locales movilizaron servicios humanitarios adicionales, la Relatora Especial recibió información acerca de la continua falta de servicios esenciales, en particular en zonas remotas del norte del estado de Rakhine. El acceso a los servicios de salud, a productos alimentarios y no alimentarios, y a la educación sigue estando restringido. Agravaban esta situación para la comunidad musulmana las restricciones

impuestas a su libertad de circulación y la discriminación de que eran objeto en cuanto a los servicios básicos. La situación respecto de los servicios y centros de salud sigue suscitando gran preocupación y la Relatora Especial ha recibido numerosos informes de muertes que se podían haber evitado, entre ellas las de jóvenes y niños debido a la diarrea o a complicaciones durante el parto.

45. Según se informó a la Relatora Especial, poco antes de su llegada, las autoridades estatales habían permitido que ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias llegaran más fácilmente a los campamentos de desplazados internos. El acceso humanitario sigue siendo insuficiente y se sitúa por debajo de los niveles anteriores a marzo de 2014. El personal de las Naciones Unidas y las ONG internacionales que trabaja en el estado de Rakhine sigue corriendo peligro. El 30 de diciembre de 2014, un funcionario nacional de las Naciones Unidas fue golpeado por autoridades militares en el norte del estado de Rakhine durante el desempeño de sus tareas. La Relatora Especial exhorta a las autoridades a asegurarse de que se rindan cuentas por tales actos y a velar por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y de las ONG internacionales. Además, observa que los tres miembros del personal nacional de ONG internacionales que fueron detenidos a raíz de los actos de violencia de 2012 permanecen recluidos en la prisión de Buthidaung y reitera su llamamiento a que sean puestos en libertad de inmediato.

46. Durante la visita de la Relatora Especial, la controversia en torno al empleo del término “rohinyá” seguía ocupando un lugar destacado. Representantes del Gobierno y representantes budistas de Rakhine explicaron a la Relatora Especial que el término “rohinyá” carecía de fundamento histórico o jurídico. Se explicó además que la aceptación de los rohinyá como grupo étnico podría legitimarlos para reclamar su condición de comunidad indígena y los derechos correspondientes en virtud de la Constitución. Por esta razón, el Gobierno ha insistido en que quienes se identifiquen como rohinyás sean considerados bengalíes, lo que les da origen étnico en Bangladesh²⁰. La Relatora Especial destaca una vez más el derecho de los rohinyás a identificarse como tales, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos²¹. La Relatora considera que la atención que se presta actualmente a la terminología empleada para describir a este grupo étnico ha paralizado los avances en importantes cuestiones de derechos humanos y el logro de soluciones duraderas. La atención debe centrarse también en mejorar la situación humanitaria y los derechos humanos de todas las personas en el estado de Rakhine, incluidas las comunidades minoritarias que se enfrentan diariamente a situaciones de fuerte discriminación, opresión e injusticia.

47. Durante su visita, la Relatora Especial escuchó numerosos rumores y conceptos erróneos que se propagaban por las comunidades como justificación de las medidas de represión contra los rohinyás. Entre la población budista de Rakhine sigue prevaleciendo la idea de que únicamente se presta apoyo internacional a los rohinyás, con exclusión de la comunidad budista. Sin embargo, la Relatora Especial ha podido observar el esfuerzo concertado de la comunidad internacional por ayudar a las dos comunidades, incluida la construcción de escuelas y centros de salud separados, unos junto a otros.

48. Los problemas del estado de Rakhine tienen consecuencias internacionales que deberían suscitar la preocupación de todos los Estados Miembros. En particular, las

²⁰ En carta dirigida al Secretario General con fecha de 17 de noviembre de 2014 (A/C.3/69/10), el Gobierno de Bangladesh expresó su objeción al uso del término “bengalí” para identificar a los musulmanes del estado de Rakhine.

²¹ El derecho de las minorías a identificarse sobre la base de sus características nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas guarda relación con la obligación que tienen los Estados de que no se discrimine a ninguna persona o grupo, principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos.

infracciones de los derechos humanos están generando un gran número de solicitantes de asilo y fomentando el contrabando y la trata de personas. En diciembre de 2014, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó un informe en el que afirmaba que alrededor de 53.000 personas habían salido de Bangladesh y Myanmar en lanchas con destino a Tailandia y Malasia entre enero y noviembre de 2014²². Si se abordaran las causas profundas de las transgresiones de los derechos humanos en el estado de Rakhine, se podría impedir el efecto en cadena que surten en el resto de la región.

E. Cuestiones relativas al desarrollo, las tierras y el medio ambiente

49. La inversión extranjera relacionada con el aprovechamiento de la tierra puede aportar beneficios sociales y económicos a Myanmar. Sin embargo, el riesgo de que se produzcan infracciones de los derechos humanos sigue siendo alto, ya que no hay una completa reglamentación ni un sistema jurídico eficaz y tampoco existe la voluntad de exigir que los poderosos grupos de interés en el país respondan de sus actos cuando se infringe la legislación vigente. En el caso de los proyectos mineros, el riesgo de que se produzcan daños ambientales graves es elevado si la gestión de los residuos nocivos no se planifica con antelación. La Relatora Especial reitera su llamamiento al Gobierno para que gestione de forma proactiva los procesos de desarrollo e inversión a fin de que haya una forma de desarrollo sostenible basada en los derechos y las necesidades de las personas. La reducción de la pobreza, el reparto equitativo de los recursos y la no discriminación deberían ocupar un lugar central. Si bien las modificaciones legislativas favorecerán el proceso, es necesario que también se produzca un cambio de actitud y comportamiento en todos los niveles de gobierno.

50. La Relatora Especial recibió durante su visita numerosas denuncias por confiscación ilegal de tierras y desalojos forzosos; se expresó asimismo inquietud por la política de aprovechamiento de la tierra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar informó a la Relatora Especial de que la mayoría de las denuncias que recibía se referían a la tierra. La Relatora Especial también recibió información sobre casos en que se había empleado fuerza excesiva contra agricultores y residentes urbanos que protestaban por la pérdida de sus hogares y sus medios de sustento. Un gran número de personas que protestaban contra las confiscaciones de tierras fueron acusadas de violación de la propiedad y condenadas a severas penas de prisión. Cabe destacar el incidente que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2014 en Letpadaung, en que las autoridades locales hicieron uso excesivo de la fuerza para reducir a un grupo de agricultores que habían sido desalojados y se manifestaban contra una mina de cobre de la empresa Myanmar Wanbao.

51. Durante su visita, los interlocutores del Gobierno señalaron a la Relatora Especial las dificultades que existían respecto del aprovechamiento sostenible y rentable de la tierra para que todos pudieran beneficiarse de las oportunidades que existían. La Relatora tiene presente que en octubre de 2014 el Gobierno publicó un borrador de su política nacional de aprovechamiento de la tierra para que se sometiera a examen público y se presentaran observaciones al respecto. La Relatora Especial encomia al Gobierno por su labor actual respecto de una política nacional de aprovechamiento de la tierra, en particular, las propuestas para reforzar la seguridad de la tenencia de los grupos marginados y vulnerables, como los titulares formales e informales de derechos sobre la tierra, las minorías étnicas y las mujeres.

²² ACNUR, “South-East Asia: irregular maritime movements, January-November 2014”. Puede consultarse en: www.unhcr.org/53f1c5fc9.html.

52. Se indicó a la Relatora Especial que la política territorial se había formulado demasiado rápido y sin celebrar suficientes consultas. La Relatora insta a las autoridades a ampliar el proceso de consultas de manera proactiva y recabar más observaciones sobre las sucesivas versiones del borrador y del proyecto de ley de tierras resultante.

Desarrollo comunitario

53. La Relatora Especial expresó su satisfacción al constatar que los ministerios correspondientes estaban llevando a cabo programas de mejora de la educación, la atención de salud y los medios de sustento y felicita al Gobierno por su colaboración con la comunidad internacional en este ámbito. Sin embargo, reitera que estos programas deben ser diseñados a partir de consultas amplias y efectivas con las comunidades afectadas y también con las autoridades locales, de manera transparente y abierta. A este respecto, la Relatora pone de relieve la necesidad de que la mujer desempeñe un papel más importante en el proceso de desarrollo, tanto en calidad de agente como de beneficiario.

54. La propuesta de modificación de la Ley del Niño es una oportunidad para eliminar la ambigüedad existente en las leyes en vigor con vistas a garantizar el derecho universal a la inscripción de los nacimientos de todos los niños en el país. En particular, las disposiciones de la Ley deberían servir para que los hijos de padres apátridas adquieran una nacionalidad a través de mecanismos oficiales. Asimismo, la definición de niño debe ser compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, que entiende por “niño” todo ser humano menor de 18 años de edad. La Relatora Especial también insta al Gobierno, en su calidad de signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a establecer un marco legal que promueva la educación inclusiva de los niños con discapacidad en lugar de un sistema de educación paralelo. Al separar a los niños con discapacidad se suele agravar su segregación y exclusión de la sociedad.

55. A medida que avanza el proceso de reforma, resulta cada vez más importante la educación de las generaciones jóvenes para que Myanmar pueda pasar al siguiente nivel de prosperidad. La Relatora Especial quedó consternada al enterarse de que en la ceremonia de graduación de la Universidad de Yangon, que había tenido lugar en diciembre de 2014, alrededor de 300 estudiantes no recibieron su diploma porque no poseían tarjetas de ciudadanía. Este problema había afectado fundamentalmente a estudiantes musulmanes originarios del estado de Rakhine. La educación no debe ser discriminatoria ni depender de la ciudadanía²³. Durante la visita de la Relatora Especial, el Viceministro de Educación le aseguró que se subsanaría la situación. La Relatora espera que se establezcan salvaguardias para impedir que se repitan situaciones como esa.

56. Recientemente, varios grupos de estudiantes de todo el país se manifestaron para exigir que se modificara la Ley de Educación Nacional en el ámbito universitario, de modo que, entre otras cosas, se incluyera el derecho a fundar sindicatos independientes de alumnos y docentes, se modificaran los requisitos de examen e ingreso a la Universidad, se impartieran algunos cursos en los idiomas de las minorías étnicas y se modernizara el plan nacional de estudios. Se informó a la Relatora Especial de que, como resultado de las negociaciones entre el Gobierno, el Parlamento y los estudiantes, se habían propuesto

²³ El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que Myanmar ha ratificado, exige que se vele por la observancia de todos los derechos contemplados en la Convención, en particular en el artículo 28, que garantiza el derecho a la educación, sin que medie discriminación alguna, en especial por motivos de nacionalidad, origen étnico u origen social. En sus observaciones finales de 2012 sobre Myanmar, el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación por que se negaran servicios de educación a los niños pertenecientes a grupos minoritarios y recomendó a Myanmar que adoptara medidas eficaces para mejorar la educación y la atención primaria de la salud de los niños (CRC/C/MMR/CO/3-4, párrs. 96 y 97).

modificaciones a la Ley. La Relatora insta al Gobierno a examinar todas las propuestas en el marco de consultas transparentes, inclusivas y exhaustivas y a armonizar la Ley con las normas internacionales de derechos humanos.

F. Estado de derecho y rendición de cuentas

57. Siguen existiendo grandes dificultades para promover el respeto del Estado de derecho. Crear confianza en el sistema de aplicación de la ley y en el sistema judicial llevará tiempo, pero debe basarse en el principio de rendición de cuentas. Durante su visita, se indicó a la Relatora Especial que, hasta la fecha, no se había logrado que las autoridades gubernamentales rindieran cuentas por las graves infracciones del derecho internacional de los derechos humanos.

58. La Relatora Especial desea poner de relieve el caso de Brang Shawng, a quien el 13 de febrero de 2015 el Tribunal Municipal de Hpakant, en el estado de Kachin, condenó a seis meses de prisión o a una multa de 50.000 kyats (50 dólares de los Estados Unidos) en virtud del artículo 211 del Código Penal. Había sido acusado de hacer “acusaciones falsas” contra el ejército de Myanmar tras solicitar al Presidente y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar que investigaran la muerte a tiros de su hija de 14 años, Ja Seng Ing, en 2012. Según tiene entendido la Relatora Especial, Brang Shawng optó por pagar la multa, pero se propone apelar la sentencia. Brang Shawng había sido sometido a un proceso judicial durante dos años, en los que había comparecido ante el tribunal en más de 50 ocasiones, y se había enfrentado a la posibilidad de ser condenado a dos años de prisión. Hasta la fecha no se ha iniciado ninguna investigación oficial sobre la muerte de Ja Seng Ing. La Relatora Especial expresa preocupación por las consecuencias de derechos humanos de este caso, en particular en lo que respecta al derecho a la igualdad y a disponer de un recurso efectivo en virtud de la ley, así como al derecho a presentar denuncias sobre cuestiones de derechos humanos y a que estas sean examinadas. El Estado también tiene la obligación de proteger a la parte demandante frente a cualquier forma de represalia como consecuencia de su denuncia²⁴. La Relatora Especial planteó estas preocupaciones en varias reuniones que mantuvo con las autoridades de Myanmar, pero las diversas explicaciones proporcionadas le resultaron insatisfactorias. La Relatora insta a que se efectúe, lo antes posible, una investigación penal transparente e independiente sobre la muerte de Ja Seng Ing y se revoque la condena de Brang Shawng.

59. La información recabada por la Relatora Especial indica que no es inusual que las personas que formulan denuncias contra los militares sean objeto de procedimientos penales por difamación o por suministrar información falsa. La Relatora observa con preocupación que, según se ha informado tras el asesinato de dos docentes de etnia kachin en el norte del estado de Shan en enero de 2015 y las investigaciones iniciales sobre el caso, el ejército haya declarado públicamente que los soldados no eran responsables y que se iniciarían acciones legales contra quienes hicieran públicas sus acusaciones contra el ejército. Myanmar se encuentra actualmente en una fase de transición de un régimen militar a una democracia y necesitará tiempo para realizar los cambios necesarios para poder establecer plenamente un régimen civil y para que los agentes estatales tengan que rendir cuentas de sus actos. Sin embargo, la Relatora Especial considera que, como medida inmediata, se debe asegurar que no se penalice a las víctimas por presentar denuncias de infracciones de los derechos humanos cometidas por el ejército de Myanmar y pedir la correspondiente reparación.

²⁴ Véanse el art. 9, párr. 2, y el art. 12, párr. 2, de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

III. Conclusiones

60. Desde 2011, Myanmar ha experimentado cambios de vasto alcance que han incidido en muchos aspectos de la vida en el país. Sin embargo, como advirtió la Relatora Especial en su informe anterior, sigue habiendo muestras de retroceso por parte del Gobierno. Durante su visita, la Relatora Especial observó un creciente clima de miedo, desconfianza y hostilidad. Cabe mencionar como ejemplo los ataques personales y sexistas de que fue objeto por parte de un monje budista nacionalista al término de su visita. En el estado de Rakhine, el clima de hostilidad imperante entre las comunidades permite que el Gobierno de la Unión justifique el confinamiento de muchos musulmanes en campamentos de desplazados internos como medida necesaria para protegerlos. Los cuatro proyectos de ley sobre “raza y religión” que se encuentran actualmente en el Parlamento impedirán que Myanmar se convierta en una sociedad pluralista y, en su lugar, arraigarán actitudes y políticas discriminatorias.

61. Desde la última visita de la Relatora, se ha producido un alarmante recrudecimiento de la violencia en la zona autónoma de Kokang, en el noreste del estado de Shan, entre el ejército de Myanmar, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar y otros grupos armados. La Relatora Especial recuerda a todas las partes que es necesario proteger a los civiles y facilitar el acceso humanitario. El estado de emergencia declarado por el Gobierno en la zona autónoma de Kokang debe ir acompañado de una estricta rendición de cuentas y de salvaguardias para los derechos humanos.

62. Si bien el crecimiento de la economía ha beneficiado a algunos grupos en el país, grandes sectores de la población han quedado al margen. Los programas de desarrollo deben basarse en los pilares centrales de reducción de la pobreza, reparto equitativo de los recursos y no discriminación. A menos que el desarrollo se lleve a cabo de un modo equitativo y proporcionando mejor educación, atención de salud y medios de sustento incluso a las personas más vulnerables, el Gobierno se expondrá a dejar a gran parte de la población con legítimos agravios contra el Estado. En un país con una larga historia de conflictos violentos, esos agravios podrían dar lugar a una mayor desvinculación del Estado y a que se mantengan o intensifiquen la inestabilidad y el conflicto. El Gobierno debe centrar su atención en empoderar a la población, en particular a los jóvenes y a las mujeres, a fin de que las nuevas generaciones puedan trabajar juntas para construir un país próspero y estable y revertir la actual tendencia hacia el nacionalismo extremo, el odio religioso y el conflicto.

IV. Recomendaciones

63. La Relatora Especial formula las siguientes recomendaciones al Gobierno de la Unión de Myanmar, que también pueden servir a la comunidad internacional como referencia sobre los posibles ámbitos de asistencia y participación. La Relatora Especial alienta al sistema de las Naciones Unidas a participar en actividades de promoción de la labor humanitaria y de los derechos humanos básicos y en programas de asistencia basados en los derechos humanos en atención a las recomendaciones y en consonancia con la iniciativa “Los Derechos Humanos Primero” del Secretario General.

64. Con respecto a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, el Gobierno debería:

a) Suprimir las numerosas restricciones a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión que figuran en la Ley del Derecho de Manifestación y Reunión Pacíficas y van más allá de las admisibles con arreglo al derecho internacional; reemplazar el sistema de autorización previa para las reuniones pacíficas por un sistema de notificación voluntaria y eliminar las sanciones penales, incluidas las penas de prisión, que se imponen por llevar a cabo actos protegidos en virtud de las normas internacionales de libertad de expresión y de reunión pacífica;

b) Modificar la Ley de Medios de Comunicación de manera que el código de conducta de los trabajadores de los medios de comunicación sea voluntario y reforzar la independencia del Consejo de Medios de Comunicación;

c) Enunciar salvaguardias para que las decisiones sobre la concesión de licencias a las publicaciones en virtud de la nueva Ley de Impresores y Editores sean objeto de rendición de cuentas y se basen en criterios transparentes;

d) Crear un servicio público de radiodifusión que funcione con carácter independiente y libertad editorial e incluya un sistema de financiación que no socave su independencia;

e) Asegurarse de que las fuerzas del orden no hagan uso excesivo o desproporcionado de la fuerza al controlar las protestas, lo que implica que la fuerza se utilice únicamente con el legítimo objetivo de hacer cumplir la ley y mantener el orden público, sea estrictamente necesaria y sea proporcional a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

f) Asegurarse de que los casos de posible uso excesivo o desproporcionado de la fuerza sean investigados de manera pronta e imparcial; cuando existan pruebas de uso excesivo de la fuerza, asegurarse de que los responsables sean enjuiciados y condenados con penas acordes a la gravedad de sus actos y que las víctimas reciban reparación, incluida una indemnización;

g) Asegurarse de que el ejercicio de las facultades de vigilancia esté justificado por ley y persiga un objetivo legítimo y de que las fuerzas del orden respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, incluso mediante la fiscalización judicial y parlamentaria de esas facultades.

65. En cuanto a los presos políticos, el Gobierno debería:

a) Poner en libertad a todos los presos políticos, incluidos los manifestantes pacíficos condenados en virtud de la Ley del Derecho de Manifestación y Reunión Pacíficas y el artículo 505 b) del Código Penal, así como los periodistas condenados con arreglo a las leyes obsoletas de difamación, violación de domicilio y seguridad nacional y demostrar un auténtico compromiso de poner fin a la reclusión por motivos políticos;

b) Cerciorarse de que el recientemente constituido Comité para Asuntos de los Presos de Conciencia formule un mandato amplio que le permita examinar todos los casos nuevos y pendientes de presos políticos; organizar reuniones periódicas del Comité, permitirle visitar sin restricciones todos los lugares de detención y darle plena autoridad para interrogar a los prisioneros en privado, así como a funcionarios del Estado, y asegurar la transparencia de la labor del Comité mediante, entre otras cosas, la publicación periódica de informes públicos.

66. Por lo que respecta a la participación en la vida política y las próximas elecciones, el Gobierno debería:

a) Llevar a cabo elecciones auténticamente democráticas, asegurándose de que los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos a

la libertad de opinión, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, puedan ejercerse de manera permanente y sin discriminación, en un entorno libre de temor e intimidación;

b) Redoblar los esfuerzos por aumentar la representación y la participación de las mujeres, como candidatas y como votantes, en las próximas elecciones, entre otras cosas, mediante la introducción de cuotas obligatorias;

c) Encontrar soluciones para que todos los residentes habituales de Myanmar puedan votar en el *referendum* constitucional y en las próximas elecciones generales;

d) Iniciar una reforma democrática significativa de la Constitución de 2008, en particular de los artículos 40 c), 59, 74, 109 b), 141 b) y 232 b).

67. En lo que respecta a la discriminación contra las minorías y a la discriminación por motivos de género, el Gobierno debería:

a) Adoptar medidas urgentes para hacer frente al sentimiento nacionalista extremo que se está intensificando en el país y asegurarse de que los altos cargos de gobierno se opongan abiertamente a la incitación al odio y de que se investigue el alcance del daño a las personas causado por la incitación al odio y la violencia y de que los responsables rindan cuentas de sus actos;

b) Revisar o retirar los proyectos de ley sobre control demográfico, monogamia, conversión religiosa y matrimonio de mujeres budistas, que no respetan las normas internacionales de derechos humanos y pueden arraigar la discriminación contra la mujer y las minorías;

c) Aplicar estrategias para hacer frente a la pobreza, la mortalidad materna e infantil y, con respecto al espaciamiento entre nacimientos, impartir educación en materia de salud pública, incluida la salud sexual y reproductiva, en lugar de imponer requisitos legales contrarios a las normas internacionales de derechos humanos;

d) Resolver la situación de los residentes habituales de Myanmar, incluidos los titulares de tarjetas de registro temporal, y asegurar que puedan obtener la ciudadanía en igualdad de condiciones y mediante un proceso no discriminatorio;

e) Modificar la Ley de Ciudadanía de 1982, de naturaleza discriminatoria, para armonizarla con las normas internacionales y, en particular, eliminar cualesquiera disposiciones que prevean la concesión de la ciudadanía sobre la base del origen étnico o la raza.

68. En cuanto a la situación en el estado de Rakhine, el Gobierno debería:

a) Cerciorarse de que el Plan de Acción de Rakhine sea compatible con las normas internacionales y no incluya medidas que puedan someter a la comunidad rohinyá a la detención arbitraria o la expulsión;

b) Respetar el derecho de los miembros de la comunidad rohinyá a la identidad étnica, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular durante el proceso de verificación de la ciudadanía;

c) Velar por que en todos los campamentos de desplazados internos, incluidos los de las zonas remotas del norte del estado de Rakhine, se presten servicios de salud, se suministren productos alimentarios y no alimentarios y se imparta enseñanza;

d) Levantar las graves y discriminatorias restricciones a la libertad de circulación en el estado de Rakhine;

e) Revisar y modificar todas las ordenanzas, instrucciones y demás normas y prácticas locales que sean discriminatorias de derecho o de hecho;

f) Levantar progresivamente las restricciones de acceso a la zona norte del estado de Rakhine que se imponen a los medios de comunicación, las ONG y las organizaciones internacionales;

g) Poner inmediatamente en libertad a los tres miembros del personal nacional de ONG internacionales que se encuentran recluidos en la prisión de Buthidaung.

69. Con respecto a las cuestiones de derechos humanos en el marco de conflictos, el Gobierno debería:

a) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la rápida intensificación del conflicto y al consiguiente estado de emergencia en la zona autónoma de Kokang abordando las causas profundas del conflicto;

b) En las zonas donde el conflicto armado persiste, procurar que todas las partes respeten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y adopten cuantas precauciones sean necesarias para proteger a los civiles y dar acceso en condiciones de seguridad a los trabajadores humanitarios que prestan ayuda a los desplazados;

c) Asegurarse de que los miembros de los grupos étnicos que participan en las negociaciones políticas y relativas al alto el fuego representen verdaderamente a las comunidades correspondientes, en particular en lo que respecta a la participación de la mujer, y establecer mecanismos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de derechos humanos que contengan los acuerdos políticos y de alto el fuego que se suscriban;

d) Poner fin al reclutamiento de niños y, para ello, seguir recabando asistencia técnica a fin de poner en marcha procesos mejores de reclutamiento, mecanismos de verificación de la edad y medios independientes de vigilancia y supervisión de todas las fuerzas armadas, desmovilizar a todos los niños reclutados en las fuerzas armadas y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados;

e) Con carácter de urgencia, el Gobierno debe poner término a la impunidad de que gozan actualmente los efectivos de seguridad que han cometido transgresiones de los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, violencia sexual, detención arbitraria y tortura y malos tratos en casos de privación de libertad.

70. En relación con el desarrollo sostenible y los programas para mejorar la educación, la asistencia de salud y los medios de sustento, el Gobierno debería:

a) Asegurarse en forma proactiva, de que se hayan celebrado consultas participativas, inclusivas y significativas sobre el aprovechamiento de la tierra con todos los interesados que corresponda y se hayan tenido debidamente en cuenta las observaciones formuladas y de que se hagan evaluaciones de las consecuencias ambientales y sociales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos antes de proceder a la concesión de tierras;

b) Asegurarse de que se sigan celebrando consultas participativas, incluyentes, amplias y verdaderas sobre la política nacional de aprovechamiento de la

tierra durante el tiempo que sea necesario y de que en la política que se proponga se dé la primera prioridad a la seguridad en los derechos de tenencia de quienes hayan utilizado la tierra durante largos períodos;

c) Asegurarse de que la Ley del Niño que se propone elimine la ambigüedad presente en las leyes en vigor con el fin de garantizar el derecho universal a la inscripción de todos los niños nacidos en Myanmar;

d) Cerciorarse de que la modificación de la Ley de Educación Nacional tenga lugar tras celebrar amplias consultas con todas las partes interesadas.

71. En cuanto a la cooperación con la comunidad internacional, el Gobierno debería:

a) Agilizar el establecimiento en Myanmar de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con un completo mandato;

b) Mejorar el entorno operacional de las Naciones Unidas y las ONG internacionales levantando los obstáculos a la concesión de visados y a las solicitudes de autorización de viaje;

c) Mantenerse en estrecho contacto con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los órganos de tratados y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, y asegurar que haya un proceso completo y participativo de preparación para el próximo examen periódico universal en que participen la sociedad civil y las instituciones nacionales;

d) Agilizar la ratificación de la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

72. La comunidad internacional debería mantener una postura constructiva y a la vez crítica respecto de la situación de los derechos humanos en Myanmar y prestar apoyo al Gobierno mediante, entre otras cosas, un diálogo de política y asistencia técnica en la introducción de nuevas reformas que le permitan cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
